



Consejo de Seguridad

Distr. general
28 de abril de 2003
Español
Original: inglés

Carta de fecha 21 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Le escribo en relación con mi carta de 12 de septiembre de 2002 (S/2002/1016).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario adjunto, presentado por San Vicente y las Granadinas en virtud de lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradeceré que tenga a bien disponer que la presente carta y su anexo se distribuyan como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Nota verbal de fecha 15 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité contra el Terrorismo establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y tiene el honor de remitir el informe complementario del Gobierno de San Vicente y las Granadinas, en cumplimiento de la petición realizada por el Comité en su nota de 30 de agosto de 2002 (véase el documento adjunto).

Documento adjunto

Informe complementario del Gobierno de San Vicente y las Granadinas con arreglo a lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Introducción

1. En su carta de 30 de agosto de 2002, el Comité contra el Terrorismo solicitó aclaraciones e información adicional respecto de diversas cuestiones planteadas en nuestro informe anterior, presentado en respuesta al mandato que figura en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Párrafo 1:

“Decide que todos los Estados:

- a) Prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo;
- b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en sus territorios con intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo;”

Preguntas 1 a) y b):

- El Comité contra el Terrorismo desearía recibir una copia de la Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002 que, según el informe, fue aprobada el 28 de mayo de 2002, así como un informe sobre la marcha de su aplicación. A este respecto, el Comité contra el Terrorismo está interesado particularmente en las disposiciones adoptadas para tipificar como delito en San Vicente y las Granadinas todo acto que no sea en sí mismo de naturaleza terrorista, como la recaudación de fondos, pero que esté relacionado con actos cometidos o que haya la intención de cometer fuera de San Vicente y las Granadinas que sean de naturaleza terrorista.
 - El Comité contra el Terrorismo también agradecería un informe sobre la marcha de los trabajos de la comisión que, conforme al informe, se creó para examinar las repercusiones de las resoluciones 1373 y 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y llevar a cabo un programa de aplicación en la medida de lo posible.
2. La Ley pertinente figura en un anexo del presente informe.
3. El 28 de mayo de 2002, la Asamblea Legislativa debatió y aprobó por unanimidad medidas legislativas reflejadas en el Proyecto de *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*. El 5 de julio de 2002, el Gobernador General sancionó la Ley, que entró en vigor el 2 de agosto de 2002 y fue promulgada en el Boletín Oficial (S.R.O. 2002, No. 43). La Ley dispone la aplicación de las disposiciones del *Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999* y recoge medidas para la lucha contra el terrorismo.

4. En los artículos 3 y 4 de la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002* se tipifica como delito la provisión o recaudación de fondos en San Vicente y las Granadinas para cometer actos de terrorismo o para facilitar la comisión de actos de terrorismo en cualquier lugar (dentro o fuera de San Vicente y las Granadinas).

5. Con la aprobación de la legislación mencionada, San Vicente y las Granadinas ha cumplido con lo dispuesto en el párrafo 2 e) de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en la que se establece que los Estados deben asegurar que los actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en sus leyes y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos.

6. Nuestro Asesor en materia de Derecho Internacional y Tratados, el Sr. Dileep A. Kamat, y el Abogado Superior de la Corona del Ministerio de Justicia, Sr. Jaundy Martin participaron en un curso práctico sobre medidas legislativas para aplicar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad relativa a la lucha contra el terrorismo, que se celebró en Antigua y Barbuda recientemente. En los debates que tuvieron lugar en el curso práctico quedó claro que, en general, las leyes de San Vicente y las Granadinas cumplían los requisitos de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad en relación con los diferentes aspectos de las cuestiones de terrorismo que se trataron. En el plan que los Sres. Kamat y Martin prepararon y presentaron en el curso práctico en relación con propuestas de medidas legislativas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, se recomendaba al Gobierno que considerase realizar en la legislación vigente únicamente las dos modificaciones siguientes:

1) En la actualidad, la definición del término “acto de terrorismo” que figura en el artículo 2 de la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*, basada en la definición del término que se recoge en el artículo 2 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, cumple satisfactoriamente los requisitos de aplicación del Convenio y de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad. Sin embargo, sólo es aplicable a los actos que causan la muerte o lesiones corporales graves a civiles y no a los actos cuyo fin es causar daños materiales graves, al uso de armas de fuego o explosivos o a los actos cuyo fin es alterar la prestación de servicios esenciales (cuando el propósito de dichos actos sea también intimidar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo).

San Vicente y las Granadinas debería ampliar la definición de “acto de terrorismo” que aparece en el artículo 2 de la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*.

2) En la actualidad, la Dependencia de Inteligencia Financiera, creada en virtud de la *Ley de la Dependencia de Inteligencia Financiera de 2001*, es responsable de recibir, obtener y difundir información relacionada con el producto de los delitos con arreglo a la *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001*. Además, tiene potestad para requerir información relacionada con los delitos que figuran en la lista 2 de la Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) y con “delitos principales” conforme a la definición que figura en el artículo 2 de esa Ley. En dicha Ley se define el “delito principal” como aquél del que alguien se beneficia obteniendo bienes como resultado de su comisión o en relación con ésta.

La *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002* no figura en la lista 2 de la *Ley relativa al blanqueo de dinero (Prevención)* y, en el caso de delitos relacionados con el terrorismo, como la provisión o recaudación de fondos o la prestación de servicios para cometer actos de terrorismo, el autor no se beneficia económicamente de la comisión de dicho delito. Por lo tanto, es dudoso que los delitos relativos a la financiación de delitos relacionados con el terrorismo entren en el ámbito de competencia de la Dependencia de Inteligencia Financiera.

El Gobierno debería modificar la *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001* a fin de facultar a la Dependencia de Inteligencia Financiera para recibir, analizar, obtener y difundir información relacionada con la financiación de delitos relacionados con el terrorismo.

7. En su calidad de Miembro de las Naciones Unidas, San Vicente y las Granadinas siempre ha cumplido sus obligaciones en lo relativo a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Tras la aprobación de las resoluciones 1373 y 1368, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas adoptó inmediatamente medidas para crear un Comité encargado de examinar la situación de su marco legislativo y de seguridad en materia de terrorismo y determinar las medidas que deberían adoptarse en respuesta a los mandatos de dichas resoluciones. La amplitud de alcance de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad requiere de San Vicente y las Granadinas la adopción de medidas extraordinarias desde el punto de vista legislativo, financiero y administrativo, lo que ha supuesto una carga para sus recursos humanos y financieros.

El Comité sigue examinando de forma continua las resoluciones mencionadas y determinando los ámbitos en que:

- a) San Vicente y las Granadinas ya cumple los mandatos;
- b) Aunque se respaldan los objetivos, pueden existir dificultades constitucionales, jurídicas, financieras y administrativas para adoptar las medidas concretas en la forma establecida por el Consejo de Seguridad;
- c) El marco legislativo, financiero y administrativo puede modificarse o reforzarse como corresponda.

Párrafos 1 c) y d):

“Decide que todos los Estados:

c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos;

d) Prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de

terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes;”

Preguntas 1 c) y d):

- El Comité contra el Terrorismo observa que la Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001, además de establecer disposiciones generales respecto del producto del delito relacionado con el tráfico de drogas y de determinados delitos financieros, también establece normas relativas al decomiso de activos utilizados o de los que se sospecha que, están destinados a ser utilizados para la comisión de determinados delitos. No obstante, la Ley no parece referirse directamente a la congelación y confiscación de activos relacionados con actividades terroristas, especialmente en el caso de que dichos activos provengan de fuentes lícitas. ¿Está previsto modificar ese aspecto de la Ley o se regula esta cuestión en la nueva Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002? A este respecto, sería conveniente que San Vicente y las Granadinas explicara el alcance del término “delito principal”, especialmente en lo que respecta a la referencia que se hace en el párrafo b) de la definición del término en el artículo 2 a todo delito que figure en la lista 2 de la presente Ley, habida cuenta de que en la lista 2 figura una serie de leyes relacionadas con temas mercantiles y no delitos.
- Parece que el alcance de la Ley de la Dependencia de Inteligencia Financiera de 2001 se limita en la actualidad a las operaciones sospechosas en el contexto concreto de la Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001 y de la Ley de bancos internacionales de 1996. Sírvase explicar cómo se aplicaría a las operaciones relacionadas con actividades terroristas. ¿Se aborda esta cuestión en la nueva Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002?
- En el artículo 46 de la Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001 se obliga a “toda institución financiera o persona que desempeñe una actividad empresarial pertinente” a vigilar y denunciar cualquier operación sospechosa. A los efectos de este artículo, ¿qué se entiende por actividad empresarial pertinente?
- ¿Qué leyes y medidas prácticas de control y vigilancia existen para asegurar que los fondos u otros recursos económicos recaudados con fines religiosos, benéficos o culturales no se desvíen para otros fines, y en particular para la financiación del terrorismo?
- Sírvase indicar las leyes y procedimientos existentes para regular sistemas alternativos de envíos de fondos, incluido el sistema conocido como *hawala* u otros similares.

8. Es cierto que, en virtud de la *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001*, no sería posible congelar y confiscar activos relacionados con actividades terroristas. Por lo tanto, en los artículos 13 a 17 de la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo)* se han incluido disposiciones —similares a las de la Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención)— para permitir el decomiso y la inmovilización de efectivo relacionado con actividades terroristas, la confiscación del efectivo inmovilizado y la

congelación de fondos y activos financieros de terroristas y entidades terroristas mediante mandamientos de decomiso del Tribunal Superior.

9. En la *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) de 2001* se entiende por “delito principal”:

a) **Todo delito grave o menos grave del que puedan conocer los tribunales de San Vicente y las Granadinas en procedimientos sumarios o juicios con jurado, del que alguien haya obtenido un beneficio conforme a la definición que figura en el apartado 3) del artículo 7 de la presente Ley, a excepción de los delitos de tráfico de drogas;**

b) **Todo delito que figure en la lista 2 de la presente Ley;**

c) **Todo acto u omisión que, de haber tenido lugar en San Vicente y las Granadinas, habría constituido un delito conforme a la definición que figura en los párrafos a) y b).**

Es decir, se entiende por “delito principal” todo delito del que puedan conocer los tribunales en un juicio con jurado o de cualquier otro modo. Esto significa que, en el caso de un delito de terrorismo del que puedan conocer los tribunales en un juicio con jurado o de cualquier otro modo, es posible ordenar la inmovilización o confiscación del producto del delito.

10. Es cierto que, conforme a la definición actual del término “delito principal” en la *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención)*, la competencia de la Dependencia de Inteligencia Financiera no puede abarcar la financiación de delitos relacionados con el terrorismo en virtud de la *Ley de la Dependencia de Inteligencia Financiera de 2001*. Este aspecto no se aborda en la nueva *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*, ya que no queríamos que un órgano independiente recibiera, analizara y obtuviera información sobre las operaciones sospechosas de financiar delitos relacionados con el terrorismo. No obstante, estudiaremos la posibilidad de modificar en consecuencia la Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención) para conferir a la Dependencia de Inteligencia Financiera la facultad de ocuparse de la financiación de delitos relacionados con el terrorismo. Sírvase consultar la respuesta 6), donde se facilita más información al respecto.

11. La *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002* tipifica como delito la provisión y recaudación de fondos para actividades terroristas. La *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención)*, Ley 39 de 2001, y el *Reglamento relativo al producto del delito (Blanqueo de dinero) de 2002* obligan a las instituciones financieras y empresas pertinentes a establecer ciertos procedimientos internos, como los programas de cumplimiento y los procedimientos de diligencia debida, que requieren la declaración de la procedencia de los fondos, de conformidad con las directrices establecidas en la legislación. Asimismo, todas las instituciones financieras y empresas pertinentes están obligadas por ley a denunciar toda operación sospechosa o inusual ante la Dependencia de Inteligencia Financiera, de conformidad con las disposiciones de la *Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero (Prevención)*. La Dependencia de Inteligencia Financiera inició su funcionamiento en San Vicente y las Granadinas el 6 de mayo de 2002. Se trata de un organismo nacional centralizado que se ocupa de obtener, analizar y difundir informes de actividades sospechosas.

12. Por lo tanto, San Vicente y las Granadinas cuenta con el marco legislativo y administrativo necesario para detectar operaciones que se sospeche que puedan estar relacionadas con la financiación del terrorismo.

13. De hecho, la Dependencia de Inteligencia Financiera ha recibido numerosos informes de actividades sospechosas presentadas por instituciones financieras y empresas pertinentes. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Dinero y la Dependencia de Inteligencia Financiera han participado en un amplio programa de formación de las instituciones financieras y las empresas pertinentes para asegurar que éstas cumplen sus obligaciones legales.

14. Cuando los fondos entran en el sistema bancario, aunque sólo sea para obtener una orden de pago a fin de transferir dichos fondos fuera del Estado, las probabilidades de detectar si se pretenden desviar para fines ilícitos, como la financiación del terrorismo, son muy altas. Esto se debe a las nuevas obligaciones de las instituciones financieras y empresas pertinentes con arreglo a la legislación contra el blanqueo de dinero, y en particular a la obligación de informar de las actividades sospechosas.

15. En la práctica, los fondos recaudados para financiar actividades ilícitas o terroristas tendrían que ingresar invariablemente en el sistema bancario o en empresas pertinentes, como entidades de giro de efectivo, empresas de mensajería, abogados, agencias de viajes, agentes inmobiliarios y concesionarios de automóviles, las cuales tienen obligación de informar de toda actividad sospechosa a la Dependencia de Inteligencia Financiera. En cualquier caso, ya que en la mayoría de los países hay requisitos de inmigración que incluyen la declaración de fondos, el ingreso de fondos en el sistema bancario suele ser necesario para poder sacar fondos del país.

Párrafo 2 a):

“Decide también que todos los Estados:

a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas.”

Pregunta 2 a):

- Como se ha mencionado, el Comité contra el Terrorismo agradecería recibir un esbozo del alcance de la nueva Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002 en relación con las actividades que tengan lugar en San Vicente y las Granadinas que no sean específicamente de naturaleza terrorista pero estén vinculadas con actos reales o potenciales de terrorismo en otro país.
- Sírvase mencionar las medidas legislativas y prácticas existentes para impedir que personas físicas o jurídicas recluten, recauden fondos o soliciten cualquier otra forma de apoyo para llevar a cabo actividades terroristas dentro o fuera de San Vicente y las Granadinas, y en particular:
 - El reclutamiento, la recaudación de fondos y la solicitud de cualquier otra forma de apoyo de otros países en o desde San Vicente y las Granadinas; y
 - Actividades engañosas, como el reclutamiento argumentando que los fines de dicho reclutamiento son otros diferentes (por ejemplo, la enseñanza) de

los reales, y la recaudación de fondos por conducto de organizaciones que actúen como pantalla.

- ¿Qué medidas tiene San Vicente y las Granadinas para impedir que los terroristas obtengan armas dentro o fuera de su territorio, y en particular armas pequeñas o ligeras? ¿Qué legislación existe con respecto a la adquisición, posesión, importación y exportación de armas?

16. En el artículo 6 de la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002* se han incluido disposiciones para que constituya un delito el hecho de que toda persona que se encuentre en San Vicente y las Granadinas o todo nacional de San Vicente y las Granadinas que se encuentre fuera del país preste cualquier forma de apoyo, activo o pasivo, a cualquier terrorista o entidad terrorista (en cualquier lugar):

- a) Reclutando o ayudando a reclutar personas; o
- b) Suministrando o ayudando a suministrar armas.

17. Con arreglo a dicha Ley, la recaudación o solicitud de fondos para las actividades mencionadas también constituiría un delito.

18. De conformidad con las leyes de San Vicente y las Granadinas, los nacionales no tienen derecho automáticamente a llevar armas y sólo pueden llevarlas quienes tengan un permiso al efecto. El suministro de armas a los ciudadanos se regula en la *Ley de armas de fuego de 1995*, cap. 275 de la Recopilación Legislativa de San Vicente y las Granadinas, Edición Revisada 1990, de la cual se adjunta una copia al presente informe.

19. Para la adquisición, posesión, importación y exportación de armas, San Vicente y las Granadinas aplica la mencionada *Ley de armas de fuego de 1995*, con arreglo a la cual toda persona que se encuentre en San Vicente y las Granadinas debe obtener la licencia o el permiso apropiados para poseer armas de fuego o municiones. Asimismo, toda persona que desee importar o exportar armas de fuego o municiones en el país también debe obtener la licencia correspondiente.

20. San Vicente y las Granadinas no fabrica, produce ni distribuye armas, municiones ni equipo militar, pero sigue estando muy preocupado respecto de la incidencia cada vez mayor de las exportaciones de armas ilícitas en el hemisferio. En particular, observa con preocupación la correlación existente entre la retirada de armas en el contexto de los procesos de paz del hemisferio y la disponibilidad de armas en el mercado negro de la región.

21. San Vicente y las Granadinas se propone fortalecer sus procedimientos administrativos y sus medidas de seguridad mediante la instalación de lectores electrónicos, y en el presente informe complementario se determinarán los ámbitos en que San Vicente y las Granadinas desea hacer uso de la asistencia ofrecida por el Comité contra el Terrorismo.

22. Los costos en materia de recursos humanos, administración y equipo vinculados con la aplicación de medidas de vigilancia más estrictas con posterioridad al 11 de septiembre son extremadamente onerosos para un pequeño Estado en desarrollo como San Vicente y las Granadinas, que anteriormente no ha tenido necesidad de dar prioridad a estas cuestiones de seguridad y que sigue preocupado por los efectos que tendrá el desvío de recursos presupuestarios destinados a esos fines para el desarrollo

socioeconómico del país. Existe la necesidad urgente de proporcionar asistencia financiera y técnica para el suministro de equipo y el ofrecimiento de formación con miras a fortalecer la capacidad del país para la vigilancia, detección e interceptación de armas ilícitas. Habida cuenta de los limitados recursos financieros de que dispone una economía pequeña, aún no se ha contemplado entre las prioridades económicas el costo de aplicar medidas relacionadas con la vigilancia de las actividades terroristas. En tal sentido, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas desea solicitar asistencia financiera a los efectos de realizar dichas actividades de vigilancia e interceptación de armas ilícitas.

Párrafo 2 b):

“Decide también que todos los Estados:

b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados mediante el intercambio de información;”

Pregunta 2 b):

- Sírvase describir el mecanismo disponible en San Vicente y las Granadinas para ofrecer alerta temprana respecto de posibles actividades terroristas a otros Estados.

23. San Vicente y las Granadinas participa en el Sistema de Seguridad Regional. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas también respeta el Tratado y otras obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad del hemisferio e internacional. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas y sus organismos de seguridad y orden público cooperan plenamente con otros gobiernos afines en este sentido. La facilitación de más detalles sobre asuntos operacionales comprometería la eficacia de las actividades en curso.

Párrafo 2 c):

“Decide también que todos los Estados:

c) Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios;”

Pregunta 2 c):

- Sírvase explicar las disposiciones existentes para excluir de San Vicente y las Granadinas a aquellas personas que soliciten asilo u otras que se ajusten a la definición que figura en el apartado c) del párrafo 2 de la resolución.

24. La *Ley de inmigración (Restricción)*, cap. 78, de la Recopilación Legislativa de San Vicente y las Granadinas, Edición Revisada, 1990, prohíbe la entrada en San Vicente y las Granadinas a toda persona que no sea nacional de San Vicente y las Granadinas y que el Gobernador General considere, sobre la base de información recibida por el Gobierno, “inmigrante o visitante indeseable”.

25. Asimismo, en la *Ley de expulsión de extranjeros indeseables*, cap. 77 de la Recopilación Legislativa de San Vicente y las Granadinas, Edición Revisada, 1990, se incluyen disposiciones según las cuales el Gobernador General podrá dictar una “orden de expulsión” contra cualquier extranjero si lo considera conveniente para la paz

y el orden público de San Vicente y las Granadinas. En el apartado 1) del artículo 3 de dicha Ley se establece lo siguiente:

“3. 1) Si lo considera oportuno, el Gobernador General podrá emitir una orden, en lo sucesivo denominada orden de expulsión, por la que requiera a cualquier extranjero a que abandone San Vicente y las Granadinas en el plazo establecido en la orden y a que permanezca fuera del país.”

26. Estas disposiciones jurídicas se consideran lo suficientemente amplias para negar el refugio en San Vicente y las Granadinas a extranjeros que financien, planifiquen, apoyen o cometan actos de terrorismo. Se adjuntan al presente informe las copias de estas leyes y las enmiendas pertinentes.

Párrafo 2 d):

“Decide también que todos los Estados:

d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos;”

Pregunta 2 d):

- Sírvase describir las medidas jurídicas y de otra índole vigentes en San Vicente y las Granadinas a fin de impedir el uso de su territorio para perpetrar actos de terrorismo fuera del país.

27. Todas las leyes que San Vicente y las Granadinas ha aprobado para combatir actos concretos de terrorismo (y para aplicar los convenios y convenciones de las Naciones Unidas en que somos parte), como la *Ley de secuestros de aeronaves*, la *Ley de protección de las aeronaves y los aeropuertos*, la *Ley contra la toma de rehenes de 2002*, o la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*, tienen como objetivo no sólo impedir y castigar la comisión de esos actos en territorio de San Vicente y las Granadinas, sino también impedir el uso del territorio nacional para la comisión de dichos actos fuera del país. Por lo tanto, no entendemos qué otras medidas especiales son necesarias a fin de impedir el uso del territorio de San Vicente y las Granadinas para cometer actos de terrorismo fuera del país.

Párrafo 2 e):

“Decide también que todos los Estados:

e) Aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y aseguren que, además de cualesquiera otras medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos, y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo;”

Pregunta 2 e):

- Aparte de la disposición concreta incluida en la Ley de protección de las aeronaves y los aeropuertos de 2002, y de la Ley de seguridad marítima de 2002, sírvase describir la competencia que tienen los tribunales de San Vicente y las Granadinas para conocer de actos delictivos como los siguientes;
 - Un acto cometido fuera de San Vicente y las Granadinas por una persona que sea nacional o residente habitual del país (se encuentre o no en ese momento en San Vicente y las Granadinas);
 - Un acto cometido fuera de San Vicente y las Granadinas por un extranjero que se encuentre en San Vicente y las Granadinas.

28. Aparte de las disposiciones concretas de la Ley de protección de las aeronaves y la *Ley de seguridad marítima* (mencionadas en el cuestionario del Comité contra el Terrorismo) que otorgan competencia a los tribunales de San Vicente y las Granadinas, existen otras disposiciones concretas sobre “competencia” en las demás leyes de lucha contra el terrorismo, como la *Ley contra la toma de rehenes de 2002* y la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*. En los artículos 3 y 4 de la *Ley contra la toma de rehenes de 2002* se establece lo siguiente:

“3. 1) Todo el que recluya, encierre, retenga o detenga por la fuerza a otra persona, y amenace con matar, lesionar o retener de manera continua a dicha persona a fin de obligar a un tercero a cometer o dejar de cometer un acto o a provocar la comisión u omisión de un acto como condición explícita o implícita para la liberación de dicha persona cometerá un acto de toma de rehenes.

2) Toda persona

a) Que cometa un acto de toma de rehenes; o

b) Que intente cometer un acto de toma de rehenes; o

c) Que sea cómplice del autor de un acto de toma de rehenes o del intento de cometerlo;

será culpable de un delito y se le podrá imponer una pena de hasta 7 años de prisión.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta o cualquier otra Ley, los delitos tipificados en el artículo 3 de la presente Ley se considerarán cometidos en San Vicente y las Granadinas cuando

a) El acto se cometa en el territorio de San Vicente y las Granadinas, incluidos buques y aeronaves con registro o licencia de San Vicente y las Granadinas o sujetos de cualquier otra forma a su jurisdicción;

b) Independientemente de dónde se haya cometido el acto, la persona que haya cometido el delito sea

i) Un nacional de San Vicente y las Granadinas; o

ii) Un apátrida cuya residencia habitual u ordinaria se encuentre en San Vicente y las Granadinas;

c) **Independientemente de dónde se haya cometido el acto, el fin de dicho acto sea inducir**

i) **Al Gobierno de San Vicente y las Granadinas, o a una parte de él; o**

ii) **a cualquier persona física o jurídica que sea nacional de San Vicente y las Granadinas, a cometer o dejar de cometer un acto o a provocar su comisión u omisión;**

d) **independientemente de dónde se haya cometido el acto, la persona secuestrada sea un nacional de San Vicente y las Granadinas;**

e) **independientemente de dónde se haya cometido el acto, la persona que lo haya cometido se encuentre, después de su comisión, en el territorio de San Vicente y las Granadinas.”**

29. En virtud de estas Leyes, los tribunales tienen competencia para conocer de delitos cuando su autor sea un nacional de San Vicente y las Granadinas (aunque el delito se haya cometido en el extranjero) o se encuentre en San Vicente y las Granadinas después de haber cometido el delito en el extranjero.

Párrafo 2 f):

“Decide también que todos los Estados:

f) Se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos;”

Pregunta f):

- Sírvase facilitar una lista de los tratados bilaterales y multilaterales sobre asistencia recíproca en materia penal en los que San Vicente y las Granadinas es parte.
- Indique cuál es el plazo legal de las solicitudes de asistencia judicial para realizar investigaciones penales o iniciar procedimientos de este tipo (especialmente cuando están relacionados con la prestación de financiación o de otro tipo de apoyo a actos de terrorismo) y cuánto se tarda, por término medio, en la práctica para tramitar una solicitud de este tipo en San Vicente y las Granadinas.

30. Adjunto al presente informe figura una lista de los tratados bilaterales y multilaterales sobre asistencia recíproca en materia penal en los que San Vicente y las Granadinas es parte.

31. No existen tratados multilaterales sobre asistencia recíproca en materia penal como tales. En algunas convenciones y convenios multilaterales en los que San Vicente y las Granadinas es parte figuran disposiciones relativas a la prestación de asistencia entre las partes en relación con procedimientos penales incoados por actos constitutivos de delito con arreglo a dichas convenciones y convenios. Como es natural, San Vicente y las Granadinas cumplirá las obligaciones que le competen en virtud de dichas disposiciones de las convenciones y convenios multilaterales de los que es parte.

32. En la *Ley de asistencia recíproca en materia penal de 1993*, con arreglo a la cual se tramitaría la solicitud en cuestión, no se establece plazo alguno para la recepción de una solicitud. Desde el punto de vista administrativo, el plazo para la presentación de dichas solicitudes es de tres semanas. No obstante, dependiendo de la situación y del carácter de ésta, las solicitudes de asistencia para la investigación o el procesamiento de un asunto penal pueden tramitarse en plazos más largos o más cortos.

33. Algunas partes de las solicitudes en las que se pide la adopción de medidas judiciales o jurídicas urgentes, como la congelación o el registro de bienes, se llevan a cabo con rapidez y prontitud. Este tipo de medidas se realiza inmediatamente después de obtenerse autorización para llevarlas a cabo una vez solicitadas, otras transcurridos unos días (1 a 5 días) tras la recepción de la solicitud. No obstante, otras partes de las solicitudes requieren más tiempo para su tramitación, por ejemplo las relacionadas con información financiera o datos de otro tipo que deben obtenerse de bancos, instituciones o entidades financieras y de otra índole. Ello se debe a que las instituciones y entidades financieras y empresariales tardan invariablemente más tiempo en examinar los datos que el plazo que se especifica en las órdenes o cartas de solicitud para que presenten el material requerido.

34. Generalmente, el material objeto de la solicitud es también bastante voluminoso, por lo que se alarga el plazo necesario para que las instituciones financieras y de otro tipo reciban y compilen dicho material.

35. No obstante, por término medio, teniendo en cuenta que algunas partes de las solicitudes en las que se solicita la adopción de medidas judiciales o jurídicas se llevan a cabo sin demora de ningún tipo, la tramitación completa de la solicitud de asistencia en materia penal lleva aproximadamente dos meses y, en raras ocasiones, hasta tres.

36. San Vicente y las Granadinas nunca ha recibido una solicitud de asistencia para la investigación o el procesamiento de asuntos relacionados con la financiación del terrorismo u otras actividades terroristas. En caso de recibirse una solicitud de este tipo, evidentemente se tramitaría con rapidez, como una cuestión prioritaria de importancia pública.

Párrafo 2 g):

“Decide que todos los Estados:

g) Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles eficaces en frontera y controles de la emisión de documentos de identidad y de viaje, y mediante la adopción de medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje.”

Pregunta g):

- Sírvase describir los organismos de coordinación interinstitucional que existen entre las autoridades encargadas de temas de estupefacientes, supervisión financiera y seguridad, en particular respecto de los controles en frontera necesarios para impedir la circulación de grupos terroristas.

- ¿Qué medidas se han adoptado para impedir la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje (independientemente del castigo de las personas que lleven a cabo dichas actividades)?

37. Toda la información que se recibe se remite a todos los organismos y puntos de entrada, así como a la Interpol, el FBI y el Alto Comisionado Británico. Se creó una Sede Conjunta Nacional para recopilar, reunir y difundir información, que constituye el mecanismo nacional de coordinación en el que participan los Departamentos de Inmigración, Guardacostas, Policía y Aduanas. El Director de la Sede Conjunta Nacional se ocupa de difundir la información recabada a los organismos siguientes:

- Policía;
- Inmigración;
- Aduanas y aranceles;
- Dependencia de Inteligencia Financiera.

Además, existe una Oficina de la Interpol que se ocupa de recibir y difundir información a las otras Oficinas Centrales Nacionales. Asimismo, hay una vinculación con la Asociación de Jefes del Servicio de Inmigración.

38. Respecto de la investigación financiera, la Dependencia de Inteligencia Financiera colabora estrechamente con todas las instituciones financieras y empresariales pertinentes, en particular en lo que respecta a la información recibida de éstas como resultado de la comunicación de actividades sospechosas. La Dependencia de Inteligencia Financiera participa también en la elaboración de una sólida base de información confidencial y colabora estrechamente con órganos nacionales, regionales e internacionales en el intercambio de información por vía electrónica, lo que puede ayudar a identificar a grupos de terroristas o a detectar la financiación de actividades terroristas.

39. Desde que se creó la Dependencia de Inteligencia Financiera en San Vicente y las Granadinas, hay una estrecha colaboración con las autoridades de orden público nacionales, en lo que respecta al intercambio de información sobre actividades ilícitas y actividades ilícitas sospechosas. La Dependencia de Inteligencia Financiera ha llevado a cabo cursos de formación y concienciación de otros organismos de represión nacionales acerca de la función de la Dependencia con el fin de promover la cooperación y el intercambio de información mutuos y promover, de este modo, de manera notable la dinamización de las investigaciones financieras de la Dependencia. De esta forma, con la creación de una sólida base de información confidencial, la adopción de un enfoque dinámico, el establecimiento de una corriente de información bidireccional y el mantenimiento de una buena relación con el mundo empresarial, podrán detectarse en San Vicente y las Granadinas las actividades ilícitas, incluidas las actividades terroristas y la circulación de terroristas.

40. En lo que respecta a los controles en frontera necesarios para impedir la circulación de grupos terroristas existen los siguientes mecanismos:

- La existencia de listas de vigilancia de todos los terroristas sospechosos en todos los puertos de entrada;
- La realización periódica de patrullas marítimas conjuntas tanto nacionales como integradas por los Estados miembros del Sistema de Seguridad Regional.

41. El Sistema de Seguridad Regional se creó en 1982 mediante un memorando de entendimiento, que posteriormente se convirtió en un tratado en marzo de 1996. El Tratado está depositado ante las Naciones Unidas. El artículo 4 del Tratado dispone:

42. “La finalidad y las funciones del sistema son promover la cooperación entre los Estados miembros para prevenir e impedir el tráfico de estupefacientes ilícitos, actuar en casos de emergencia nacional, llevar a cabo labores de búsqueda y rescate, realizar controles de inmigración, proteger la pesca, llevar a cabo el control de las aduanas, cumplir las labores de policía marítima, actuar en caso de desastres naturales y de otro tipo, controlar la contaminación, luchar contra las amenazas a la seguridad nacional, prevenir el contrabando, y proteger las instalaciones de alta mar y de la zona económica exclusiva”.

43. El alcance de las disposiciones del Tratado sobre el Sistema de Seguridad Regional permite desempeñar un papel de apoyo, si fuera necesario, para ayudar a la labor nacional de detección y prevención de posibles actos de terrorismo y la circulación ilícita de terroristas sospechosos en el Caribe Oriental.

44. Las medidas adoptadas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje son las siguientes:

- La inspección y el examen minuciosos de los documentos de identidad y de viaje en los puertos de entrada.
- La formación de los funcionarios de aduanas e inmigración para la identificación de documentos de viaje.

Párrafo 3 a), b) y c):

“Exhorta a todos los Estados a:

a) Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas individuales o de redes de terroristas; los documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados; el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos; la utilización de tecnologías de las comunicaciones por grupos terroristas y la amenaza representada por la posesión de armas de destrucción en masa por parte de grupos terroristas;

b) Intercambiar información de conformidad con el derecho internacional y la legislación interna y cooperar en las esferas administrativas y judiciales para impedir la comisión de actos de terrorismo;

c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra quienes cometan esos actos”;

Pregunta 3 a), b) y c):

- ¿Existe un mecanismo institucional para aplicar lo dispuesto en el apartado 3 a), b) y c) de la resolución?

45. Esta cuestión ya se ha abordado en la respuesta que figura en el párrafo No. 44 *supra*.

Párrafo 3 c):**“Exhorta a todos los Estados a:**

c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra quienes cometan esos actos”;

Pregunta 3 c):

- ¿Cuál es la base jurídica para conceder la extradición en San Vicente y las Granadinas? En particular:
 - ¿Existe alguna legislación al respecto? De ser así, sírvase exponerla.
 - ¿Depende, en algún caso de la existencia de tratados bilaterales? De ser así, sírvase facilitar una lista de los países con los que San Vicente y las Granadinas ha celebrado tratados bilaterales al respecto.

46. La concesión de la extradición en San Vicente y las Granadinas se regula en la *Ley relativa a los fugados de 1989*. Esta Ley, que entró en vigor el 27 de diciembre de 1989, dispone la devolución de San Vicente y las Granadinas de las personas que se encuentren en el país acusadas de delitos cometidos en otros países, o condenados por dichos delitos, y cuya devolución sea solicitada por esos países para cuestiones relacionadas con la comisión de esos delitos o la condena por los mismos. La Ley se adjunta al presente informe.

47. En el caso de un país extranjero que no pertenezca al Commonwealth, la aplicación de esa Ley a dicho país dependerá de la existencia de un tratado de extradición bilateral con ese país o de una convención multilateral en la que tanto San Vicente y las Granadinas como ese país sean parte (siempre que en este último caso la aplicación de la Ley se refiera únicamente a los delitos recogidos en la Convención).

48. Los países extranjeros a los que se ha aplicado la *Ley relativa a los fugados* sobre la base de acuerdos de extradición bilaterales celebrados antes de la independencia del Reino Unido figuran en la Segunda Lista de la Ley.

49. Hasta la fecha, en lo que respecta a tratados de extradición celebrados con posterioridad a la independencia del Reino Unido por San Vicente y las Granadinas, el Gobierno concluyó uno con los Estados Unidos de América en 1996.

Párrafo 3 d):**“Exhorta a todos los Estados a:**

d) Adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, inclusive el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999.”

Pregunta 3 d):

- El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le presentase un informe en relación con los convenios y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, sobre los progresos realizados por San Vicente y las Granadinas en:
 - La adhesión a los instrumentos en los que aún no sea parte.

- La promulgación de legislación y la adopción de otras medidas necesarias para aplicar los instrumentos a los que se haya adherido.

50. San Vicente y las Granadinas se ha adherido a siete convenios y protocolos internacionales que figuran en la Segunda Lista de la *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*, además de al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.

51. Hemos promulgado legislación especial para aplicar cada uno de los convenios y protocolos a los que nos hemos adherido. Así pues, contamos con una *Ley de secuestro de aeronaves de 1997*; una *Ley de protección de aeronaves y aeropuertos de 2002*; *Ley relativa a las personas que gozan de protección internacional de 2002*; una *Ley contra la toma de rehenes de 2002*; una *Ley de seguridad marítima de 2002* y una *Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo) de 2002*. Estas Leyes figuran en un anexo al presente informe.

52. San Vicente y las Granadinas aún no es parte en el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección de 1991, ni en el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1999, pero se adoptarán medidas para adherirse a esos convenios y, a continuación, se promulgará la legislación pertinente para su aplicación.

Párrafo 3 e):

“Exhorta a todos los Estados a:

- e) Fomentar la cooperación y aplicar plenamente los convenios y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001)”.

Pregunta 3 e):

- ¿Se han incluido los delitos recogidos en los convenios y protocolos internacionales pertinentes como delitos que permiten la extradición en los tratados bilaterales correspondientes (de haberlos) en los que San Vicente y las Granadinas es parte?

53. En la legislación relativa a la aplicación de los convenios y protocolos internacionales pertinentes figuran un apartado sobre extradición en el que, entre otras cosas, se dispone que “a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la *Ley relativa a los fugados*, dicha Ley será aplicable a todos los Estados partes en la Convención o el Convenio en relación con los delitos recogidos en éstos”.

54. Asimismo, figura una disposición que estipula que “los delitos tipificados en la presente Ley se entenderán incluidos en la descripción de los delitos pertinentes que figuran en la Primera Lista de la *Ley relativa a los fugados*”.

55. Así pues, no es necesario modificar los tratados bilaterales para incluir los delitos recogidos en los convenios y protocolos relativos a los delitos de terrorismo.

Párrafo 3 f):

“Se exhorta a todos los Estados a:

- f) Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive

las normas internacionales en materia de derechos humanos, antes de conceder el estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse de que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado actos de terrorismo ni participado en su comisión.”

Pregunta 3 f):

- ¿Qué legislación, procedimientos y mecanismos hay en vigor para garantizar que no se conceda el estatuto de refugiado a los solicitantes de asilo que hayan participado en actividades terroristas?

56. San Vicente y las Granadinas aún no ha recibido ninguna solicitud de asilo y tampoco cuenta con leyes especiales para los refugiados. No obstante, si se diera el caso, San Vicente y las Granadinas podría cumplir con lo dispuesto en el apartado 3 f) de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad aplicando las disposiciones de la *Ley de inmigración (Restricción)* relativas a la prohibición de la inmigración.

Párrafo 3 g):

“Exhorta a todos los Estados a:

g) Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de refugiado no se ha utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas;”

Pregunta 3 g):

- ¿Es posible que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación de San Vicente y las Granadinas, se denieguen solicitudes de extradición de presuntos terroristas por motivaciones políticas?

57. En la *Ley relativa a los fugados* hay una disposición que estipula que todos los delitos tipificados en algún convenio internacional multilateral (en el que San Vicente y las Granadinas y el país solicitante sean parte) que, con arreglo a ese convenio, no se consideren delitos políticos a los fines de la extradición, no se considerarán delitos políticos para negar la extradición.

58. El artículo 8 2) d) de la mencionada Ley estipula lo siguiente:

“8. 2) A reserva de lo dispuesto en el apartado 4), no se considerarán delitos políticos los que se enumeran a continuación:

- a) Los delitos contra la vida o la persona de un Jefe de Estado o un miembro de su familia inmediata;
- b) Los delitos contra la vida o la persona de un Jefe de Gobierno, un Ministro del Gobierno o un Miembro del Parlamento;
- c) El asesinato y el homicidio;
- d) Los actos tipificados como delito en un convenio internacional multinacional en el que San Vicente y las Granadinas y el Estado solicitante sean parte y cuya finalidad sea impedir o reprimir

un tipo específico de delitos y que imponga a las partes en el Convenio la obligación de extraditar o procesar a la persona solicitada.”

59. Así pues, si en el convenio correspondiente figuran disposiciones que digan que no debe negarse la extradición por motivaciones políticas por un delito tipificado en la Convención, San Vicente y las Granadinas no tendrá la posibilidad de negar la extradición por motivaciones políticas.

Párrafo 4:

“4. *Observa con preocupación* la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales, y a ese respecto pone de relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional, para reforzar la respuesta internacional a este reto y amenaza graves a la seguridad internacional.”

Pregunta 4:

- ¿Ha abordado San Vicente y las Granadinas alguno de los problemas que se plantean en el párrafo 4 de la resolución?

60. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas y el Organismo encargado de la Seguridad y el Orden Público comparten las inquietudes del Consejo de Seguridad respecto de la relación existente entre los diversos componentes de la delincuencia transnacional y participa plenamente a nivel nacional, regional e internacional en la respuesta a esas amenazas a la seguridad. Para los pequeños Estados como San Vicente y las Granadinas, las cuestiones de seguridad no pueden separarse de las cuestiones económicas. Muchas de las nuevas amenazas a la seguridad internacional se crean o se ven exacerbadas por el hecho de que una gran parte de nuestra sociedad no pueda cubrir sus necesidades básicas. La pobreza, la desigualdad y la injusticia siempre han ofrecido un terreno fértil para el fanatismo y la delincuencia. Las principales amenazas a la seguridad con las que se enfrentan la mayoría de los gobernantes a principios del siglo XXI no se centran ya en el enfrentamiento militar entre Estados, sino en los problemas que plantean amenazas nuevas que no son tradicionales, de las que el terrorismo sólo es un componente. Para los pequeños Estados vulnerables constituyen amenazas igualmente devastadoras el tráfico ilícito de estupefacientes y armas pequeñas, la delincuencia organizada transnacional, la pandemia del VIH/SIDA, los efectos de la liberalización económica, la pobreza y la exclusión social, la degradación ambiental y los desastres naturales. Los gobiernos de nuestros países no están estructurados para hacer frente a esas amenazas en donde no existe un enemigo definido y cuyos principales autores no son Estados.

61. Los atentados terroristas que tuvieron lugar en Nueva York y Washington, D.C. el 11 de septiembre de 2001 han cambiado el mundo para empeorarlo. Sólo pueden hacerse conjeturas acerca de cuál será la duración de este momento histórico, dado que aún hay que conocer a fondo las consecuencias de estos atentados. Pero no debe cundir el pánico. Los pueblos y naciones justos de todo el mundo han decidido que la barbarie del terrorismo no triunfará sobre la civilización, sus valores y su forma de vida. Por ello, en todo el mundo, los pueblos y naciones justos se están uniendo como nunca antes lo han hecho para luchar contra el terrorismo y las consecuencias

que conlleva para la seguridad, la economía, y el entorno social y político. Al final, la acción concertada a nivel internacional, regional y nacional derrotará a la barbarie y logrará que venzan la paz, la estabilidad, la seguridad, el progreso y la renovación económicas, la recuperación social, el fortalecimiento de la democracia y la solidaridad de la comunidad.

62. Si bien los Estados pequeños son especialmente vulnerables a estas nuevas e insidiosas amenazas, ningún país puede considerarse a salvo y, dado el carácter transfronterizo de las amenazas, la única respuesta posible es una coordinada a nivel multilateral. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas está plenamente comprometido a colaborar con otros Estados en el marco del derecho internacional y las prácticas más adecuadas universalmente aceptadas para reprimir el terrorismo internacional en todas sus manifestaciones. Cabe recordar que San Vicente y las Granadinas apoya, por conducto de sus instrumentos diplomáticos, varias resoluciones de las Naciones Unidas así como los principales convenios y convenciones de cooperación para luchar contra el terrorismo internacional.

63. A nivel subregional, San Vicente y las Granadinas ha participado en la labor del Grupo de Tareas Intergubernamental sobre Estupefacientes de la CARICOM, que se creó en la quinta reunión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la CARICOM de diciembre de 1996 y cuya principal tarea consiste en elaborar una política de lucha contra los estupefacientes integrada a nivel regional que abarque todos los aspectos del tráfico de drogas. Desde su creación, el Grupo de Tareas ha demostrado ser un mecanismo muy útil para coordinar los programas de lucha contra los estupefacientes en la región.

64. Los Jefes de Gobierno de la CARICOM crearon en julio de 2001 un Grupo de Tareas sobre delincuencia y seguridad de la CARICOM para estudiar las causas fundamentales de la delincuencia, la violencia y las amenazas a la seguridad en la región y elaborar recomendaciones con miras a una respuesta regional y subregional coordinada. San Vicente y las Granadinas también ha participado en la labor de este Grupo de Tareas.

65. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas participa en un programa de evaluación del sector financiero cuyo inicio está previsto para la segunda mitad de 2003. En la primera etapa del proyecto se llevará a cabo una autoevaluación de las disposiciones en materia de blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo existentes en los Estados miembros, cuyo objetivo es elaborar un plan general factible para la adopción de medidas de los sistemas, prácticas y procedimientos jurídicos y de supervisión. Con el sistema de autoevaluación se trata de determinar la medida en que los Estados miembros han aplicado la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (la Convención de Viena), el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, así como otros convenios y convenciones regionales en materia de blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo (como la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo de dinero, registro, decomiso y confiscación del producto del delito). También se evaluará la medida en que se ha aplicado la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

66. A nivel internacional, cabe señalar que San Vicente y las Granadinas también es parte en una serie de tratados bilaterales y multilaterales que abordan varios elementos relacionados con las amenazas a la seguridad transnacional.

67. San Vicente y las Granadinas sigue preocupado por el hecho de que en su calidad de Estado pequeño y vulnerable, no tenga capacidad para defenderse frente a las armas de destrucción en masa y reitera su grave preocupación por el continuo uso del Mar Caribe como ruta para el tránsito de material nuclear peligroso, que hace que todos los países de la región se encuentren ante un gran riesgo de una posible catástrofe en el caso de producirse un acto terrorista o un accidente. Esta cuestión sigue siendo objeto de la atención del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias de la Comunidad del Caribe que, en su última reunión de 8 de mayo de 2002, emitió un comunicado subrayando que “los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores revelaciones a la opinión pública de que los grupos terroristas habían considerado la posibilidad de recurrir a armas nucleares demuestra claramente que la amenaza de accidentes nucleares o de actos de terrorismo nuclear es muy real. En estas circunstancias, y en un momento en que la comunidad internacional se concentra intensamente en cuestiones de seguridad, es inconcebible que se permita que siga habiendo envíos peligrosos de manera rutinaria sin considerar los riesgos evidentes y cada vez mayores a los que con ellos se expone a la población de los países de tránsito”.

Otros asuntos

- Sírvasse facilitar un organigrama del mecanismo administrativo, por ejemplo policía, controles de inmigración, aduanas y organismos de supervisión fiscal y financiera, establecidos por San Vicente y las Granadinas a fin de aplicar las leyes, reglamentos y otras disposiciones que contribuyan al cumplimiento de la resolución.

68. Adjunto al presente informe figura el organigrama correspondiente.

Conclusión

69. En aplicación del párrafo 1.4 de las directrices para la presentación de informes de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de 28 de septiembre de 2001, y en lo que respecta a la determinación de ámbitos en los que los Estados necesitan orientación o asistencia técnica adicional para aplicar la resolución, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas reitera su solicitud de asistencia para la aplicación de algunas de las medidas de lucha contra el terrorismo requeridas. San Vicente y las Granadinas es un Estado pequeño con recursos técnicos y financieros limitados para responder a las exigencias de la lucha contra el terrorismo.

70. Tradicionalmente, el terrorismo no ha sido una amenaza seria para este país y las prioridades presupuestarias se han centrado en el desarrollo económico y social de la isla, así como en el objetivo establecido de eliminar la pobreza. El mantenimiento de este objetivo de desarrollo ya se ve amenazado por la importancia que debe concederse ahora a aspectos no tradicionales de la seguridad, como se ha señalado anteriormente. No obstante, el Gobierno es consciente de la amenaza real que constituyen el terrorismo internacional y sus autores. En estas circunstancias, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas sigue comprometido en la lucha contra el

terrorismo y hará todo lo que esté en sus manos por contribuir a la labor internacional al respecto, de conformidad con lo dispuesto en su Constitución y en el derecho internacional pertinente. No obstante, San Vicente y las Granadinas requerirá apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional para impedir que se desvíen los recursos limitados con que cuenta de actividades de desarrollo prioritarias hacia cuestiones de seguridad de las que los principales beneficiarios serán los países desarrollados contra los que van dirigidos la mayor parte de los actos de terrorismo.

71. Los organismos de orden público, incluido el Departamento de Aduanas e Inmigración, requieren asistencia técnica para la adquisición y el mantenimiento de la tecnología adecuadas, que incluye equipo electrónico de vigilancia e interceptación para los puertos y aeropuertos así como para la formación del personal en técnicas de lucha contra el terrorismo, incluida la detección de documentos de viaje fraudulentos y, en su caso, para mejorar la capacidad forense con miras a la detección de armas biológicas y químicas.

72. Se requiere asistencia financiera y técnica, así como formación, para los fines específicos que a continuación se enumeran:

- El Grupo de Tareas, la División Especial y el Departamentos de Inteligencia de la Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas.
- La prestación de asistencia a los profesionales del derecho pertinentes, tanto en materia penal como civil, para la elaboración de normas de seguridad y la preparación de la legislación correspondiente. También es necesario realizar estudios técnicos a fin de examinar la legislación y la capacidad administrativa de San Vicente y las Granadinas para aplicar muchas de las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo y la financiación de éste.
- La prestación de asistencia en materia de tecnología de la información para la creación de una base de datos general que permita detectar movimientos y actividades sospechosos a nivel nacional, regional e internacional.
- La adquisición de equipo y programas informáticos adecuados para crear una red eficaz que vincule a los organismos de orden público correspondientes, tanto a nivel nacional como regional.
- La adopción de medidas para lograr que el control de fronteras de San Vicente y las Granadinas sea más eficaz y más eficiente mediante la prestación de acceso rápido a la información relativa a pasajeros, transportistas y cargas. Esta información avanzada deben facilitarla por vía electrónica los transportistas, tanto aerolíneas como buques, a fin de que los organismos de orden público puedan determinar mejor el perfil y los objetivos.

Anexo 1

Lista de leyes

1. Ley de las Naciones Unidas (Medidas contra el terrorismo), Ley 34 de 2002.
2. Ley relativa a los fugados de 1989.
3. Ley de la Dependencia de Inteligencia Financiera de 2002.
4. Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero de 2001.
5. Ley de armas de fuego de 1995.
6. Ley de inmigración (restricciones).
7. Ley de expulsión de extranjeros indeseables.
8. Ley de secuestro de aeronaves de 1997.
9. Ley de protección de aeronaves y aeropuertos de 2002.
10. Ley contra la toma de rehenes de 2002.

Anexo 2

Lista de tratados bilaterales y multilaterales de asistencia recíproca en materia penal en los que San Vicente y las Granadinas es parte

- Tratados bilaterales.
- Tratados de extradición entre el Gobierno de San Vicente y las Granadinas y el Gobierno de la República de China. Fecha de entrada en vigor: 19 de agosto de 1992.
- Tratados de asistencia jurídica recíproca en materia penal entre el Gobierno de San Vicente y las Granadinas y el Gobierno de los Estados Unidos de América de 1998.
- San Vicente y las Granadinas es parte en un Tratado multilateral de doble imposición de la Comunidad del Caribe. En este tratado son parte los siguientes Estados Miembros y territorios: Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tabago.

Anexo 3

Organigrama de los organismos de orden público del Gobierno de San Vicente y las Granadinas

